

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad.



MONTI
Laura
Mercedes

Firmado digitalmente
por MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2022.10.04
12:00:16 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U., con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, interpuso, en los términos del art. 322 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, "acción declarativa de certeza y de inconstitucionalidad" contra la Provincia de Buenos Aires a fin de que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 437, 439 y concordantes de la disposición de la Agencia de Recaudación Provincia de Buenos Aires (ARBA) serie "B" 1/2004, en cuanto le imponen – en su calidad de entidad financiera – la obligación de actuar como agente de retención en el marco del "Régimen Especial de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Tarjetas de Compra y de Crédito".

Solicitó también la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones de la Jefa del Departamento Relatoría I de ARBA 3493/22 y 3494/22, en cuanto extendieron el alcance del citado régimen a los pagos efectuados en establecimientos y/o sucursales del banco ubicadas fuera del territorio de esa provincia (operaciones realizadas por tarjetahabientes para adquirir bienes y/o servicios) por ser contribuyentes en esa jurisdicción y encontrarse en el padrón elaborado por ARBA.

Consideró que la demandada excedió su competencia territorial al invadir atribuciones y competencias exclusivas del Congreso Nacional y del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al extender su "poder de imposición" a los actos y operaciones de pago realizadas fuera de su territorio,

vulnerando el régimen federal de gobierno y las leyes nacionales 21.526, 24.144 y 25.065.

Agregó que la carga de retener por la causal excluyente de incorporación en el padrón sin sustento territorial importa una patente violación del principio de territorialidad, del régimen federal de gobierno y de los principios de razonabilidad y legalidad (arts. 1°, 28, 75 -incs. 13, 15, 18, 31 y 32- y 126 de la Const. Nac.).

Peticionó como medida cautelar de no innovar, en los términos de los arts. 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que se ordene a la demandada y/o a ARBA a que se abstengan de: (i) reclamar, ejecutar, efectivizar y/o percibir los ajustes tributarios expuestos en las disposiciones ARBA 3493/22 y 3494/22; (ii) trabar embargos u otra medida precautoria por el monto de los ajustes mencionados; (iii) cursar nuevos reclamos y/o instruir sumarios por nuevas diferencias de retenciones con sustento en la aplicación del "régimen de retención en ciernes", respecto de los pagos efectuados por los tarjetahabientes para la adquisición de bienes o servicios en locales o establecimientos ubicados fuera del territorio de la Provincia de Buenos Aires.

En ese estado, se confirió vista digital, por la competencia, a este Ministerio Público.

-II-

Uno de los supuestos en que procede la competencia originaria de la Corte, prevista en los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional y 24, inc. 1°, del decreto-ley 1285/58, se da cuando es parte una provincia y la acción entablada tiene un manifiesto contenido federal, esto es, en los casos en que la

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. C/ BUENOS AIRES, PROVINCIA DE s/ acción declarativa de certeza e inconstitucionalidad.



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

pretensión se funda directa y exclusivamente en prescripciones constitucionales, en tratados con las naciones extranjeras y en leyes nacionales, de tal suerte que la cuestión federal es la predominante en la causa (Fallos: 315:448; 318:2534; 319:1292; 323:1716, entre otros).

A la luz de dicha pauta, observo que, según se desprende de los términos de la demanda -a cuyos términos se debe acudir de modo principal para determinar la competencia (Fallos: 312:808; 314:417 y 328:1979, entre otros)- la actora pone en tela de juicio el régimen de recaudación establecido por la Provincia de Buenos Aires para el impuesto sobre los ingresos brutos, en cuanto allí se designa a la actora como agente de retención de la mencionada gabela respecto de pagos efectuados fuera del territorio de esa provincia.

Puntualiza que las exigencias establecidas en ese régimen a los agentes de retención se traducen en un ejercicio inconstitucional de las potestades tributarias (de recaudación) locales -más allá de los límites de su territorio-; y, a la vez, desconocen las facultades exclusivas del Congreso de la Nación y del BCRA para regular la materia bancaria. Como consecuencia de lo anterior, concluye que las disposiciones aquí cuestionadas son violatorias de lo ordenado en la Constitución Nacional (arts. 1º, 28, 75 -incs. 13, 15, 18, 31 y 32- y 126) y de lo establecido en diversas normas federales (leyes 21.526, 24.144 y 25.065).

En tales condiciones, observo que, aunque la acción de certeza e inconstitucionalidad se dirige contra normas locales, la resolución del planteo esgrimido exige dilucidar si la

demandada pretende ejercer sus facultades tributarias de modo tal que sean susceptibles de afectar la regulación de la actividad bancaria, que constituye una atribución del Gobierno Nacional (conf. art. 75, incs. 6°, 18 y 32 de la Const. Nac.), disposiciones de naturaleza federal cuya adecuada hermenéutica resultará esencial para la justa solución de la controversia y permitirá apreciar si existe la violación constitucional que aquí se alega (conf. Fallos: 326:880 y 2741; 330:2470; 331:2528).

Ello, desde mi punto de vista, implica que la causa se encuentra entre las especialmente regidas por la Constitución Nacional, a las que alude el art. 2°, inc. 1°, de la ley 48, ya que versa sobre la preservación de las órbitas de competencia entre las jurisdicciones locales y el Gobierno Federal que determina nuestra Ley Fundamental, lo que torna competente a la justicia nacional para entender en ella (Fallos: 315:1479; 329:3459 y 4394).

-III-

En razón de lo expuesto, opino que al ser parte una provincia en un pleito de manifiesto contenido federal, cualquiera que sea la vecindad o nacionalidad de la actora (Fallos: 317:473; 318:30 y 323:1716, entre otros), el proceso corresponde a la competencia originaria del Tribunal.

Buenos Aires, de octubre de 2022.